

Cuarto.—Que la vigencia de este Convenio se extenderá desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 1999.

Quinto.—Que en el desarrollo y aplicación de este Convenio se estará a lo establecido en el Protocolo General de Colaboración suscrito por ambas partes.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma, en duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.—El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, Alberto Larranz Vileta.—El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

22859 *RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1999, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad al Protocolo general de colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo de programas sobre drogodependencias.*

Suscrito entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña un Protocolo de colaboración para el desarrollo de programas sobre drogodependencias, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles Orozco.

ANEXO

En Madrid, a 1 de octubre de 1999.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior, en representación del Gobierno de la Nación, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De otra parte, el honorable señor don Eduard Rius i Pey, Consejero de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 6 de la Ley 30/1992, antes citada.

EXPONEN

Primero.—Que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tiene atribuidas competencias en materia de coordinación sobre drogodependencias, de acuerdo con el Real Decreto 79/1997, de 24 de enero.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene atribuidas por su Estatuto de Autonomía competencias en materia de sanidad interior e higiene.

Segundo.—Que según lo establecido en el artículo 3.1.b) de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre creación de un Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, las Comunidades Autónomas son beneficiarias de dicho Fondo.

La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, creada por esta Ley y adscrita a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, es la encargada de la distribución de dicho Fondo, según los criterios aprobados anualmente por el Consejo de Ministros y las previsiones establecidas por la Conferencia Sectorial.

Tercero.—Que con este objetivo desean establecer las líneas de colaboración para atender programas o acciones que resulten coyunturalmente relevantes y que precisen medidas específicas en las programaciones que se realizan regularmente.

En consecuencia, las partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente Protocolo general que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Protocolo general tiene como finalidad establecer la colaboración entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y el

Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña, como beneficiaria del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

Segunda.—Los programas o actividades aprobados y subvencionados por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones se definirán anualmente, incluso en su presupuesto, mediante un Convenio específico que suscribirán ambas partes en desarrollo del presente Protocolo.

Tercera.—A la firma de cada Convenio anual, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, conforme a la resolución de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, transferirá a la Comunidad Autónoma de Cataluña la cantidad establecida en el mismo con cargo al concepto 16.06.313-G.458 del presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Cuarta.—El Departamento de Sanidad y Seguridad Social asumirá la tramitación administrativa y el seguimiento del programa convenido.

El Departamento remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de evaluación del desarrollo del programa y una certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución del programa.

Si el gasto realizado fuese menor que la cantidad subvencionada, el remanente será reintegrado al Tesoro Público.

Quinta.—El presente Protocolo general entrará en vigor el día siguiente al de su firma y su vigencia será indefinida, si no se formula, por cualquiera de las partes, renuncia expresa y por escrito.

En este caso, las partes firmantes se comprometen a seguir desarrollando hasta su conclusión aquellas actuaciones en curso que, en cumplimiento del mismo, no hubiesen sido terminadas en dicho momento y fuesen necesarias para la consecución del interés público perseguido con este Protocolo.

Sexta.—Será causa resolutoria de este Protocolo general cualquiera que suponga o conlleve el incumplimiento de las cláusulas establecidas en el mismo, o las de los Convenios específicos en que anualmente se concrete la colaboración.

Séptima.—Para la ejecución, seguimiento e interpretación del presente Protocolo y los Convenios específicos que se suscriban en desarrollo del mismo se constituirá una Comisión Mixta formada por dos representantes designados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y dos representantes designados por el Consejero de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Octava.—Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo, en el seno de la Comisión Mixta aludida en la cláusula anterior, las incidencias que puedan sobrevenir en aplicación de este Protocolo general y los convenios específicos que se suscriban en desarrollo del mismo, relativas a su interpretación, cumplimiento, extinción y efectos.

No obstante lo anterior, para el caso de que se mantengan las discrepancias sobre las incidencias citadas, dada la naturaleza administrativa de este Protocolo general, las partes someterán aquellas discrepancias al conocimiento de los tribunales competentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones legales de que son titulares las autoridades firmantes y obligando con ello a las instituciones a las que representan, suscriben por duplicado el presente Protocolo general en el lugar y fecha ya indicados.—El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.—El Consejero de Sanidad y Seguridad Social, Eduardo Rius i Pey.

22860 *RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad al Convenio Específico para 1999 del Protocolo General de Colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma del País Vasco (Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social).*

Suscrito entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco un Convenio Específico para 1999 del Protocolo General de Colaboración, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles Orozco.

ANEXO

En Madrid, a 26 de julio de 1999,

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior.

De otra, el excelentísimo señor don Sabin Intxaurraga Mendibil, Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Justicia, Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco suscribieron un Protocolo General de Colaboración, de fecha 2 de junio de 1999, en materia de drogodependencias, que establece que los programas en que se concrete el Protocolo se establecerán en un Convenio anual, en virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.—Que la actuación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 1999 se concretará en el desarrollo de los siguientes programas:

Programa de asistencia o piso de acogida de la Comisión Antisida de Gipuzkoa-Acasgi.

Piso de reinserción para drogodependientes y excarcelados de la Asociación Bizitegui.

Piso de acogida de la Asociación Bidesari, Pastoral Penitenciaria.

Programa de deshabitación de drogodependientes en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca, Luzgizen.

Programa para la reinserción de drogodependientes con problemas jurídico-penales: Caserío Mendigane de la Asociación Lagun-Artean.

Proyecto de atención social y comunicación con presos y presas.

Segundo.—Que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas financiará la realización de estos programas, según el acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de 15 de junio de 1999, con un total de 10.000.000 de pesetas con cargo al concepto 16.06.313-G.458, que, a tal fin, ha sido dotado con créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, y de acuerdo con la siguiente distribución:

Programa de asistencia o piso de acogida de la Comisión Antisida de Gipuzkoa-Acasgi: 2.300.000 pesetas.

Piso de reinserción para drogodependientes y excarcelados de la Asociación Bizitegui: 1.500.000 pesetas.

Piso de acogida de la Asociación Bidesari, Pastoral Penitenciaria: 1.250.000 pesetas.

Programa de deshabitación de drogodependientes en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca, Lurgizen: 1.500.000 pesetas.

Programa para la reinserción de drogodependientes con problemas jurídico-penales: Caserío Mendigane de la Asociación Lagun-Artean: 1.000.000 de pesetas.

Proyecto de atención social y comunicación con presos y presas: 2.450.000 pesetas.

Tercero.—Que, durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la Consejería de Justicia, Trabajo y Seguridad Social remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.—Que la vigencia de este Convenio se extenderá desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 1999.

Quinto.—Que en el desarrollo y aplicación de este Convenio se estará a lo establecido en el Protocolo General de Colaboración suscrito por ambas partes.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma un duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.—El Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Sabin Intxaurraga Mendibil.—El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

MINISTERIO DE FOMENTO

22861 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se publica la referencia a la Norma UNE-TBR 8 contenida en la reglamentación técnica común CTR 8 para equipos terminales con microteléfono destinados a conectarse a la red digital de servicios integrados (RDSI) que ofrecen el teleservicio de telefonía a 3,1 kHz (segunda edición).

El Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, aprueba el Reglamento que establece el procedimiento de certificación para los equipos a los que se refiere el artículo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, y transpone también la Directiva 91/263/CEE, del Consejo de la Unión Europea.

Aunque la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, ha derogado la práctica totalidad de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, permite que la normativa de desarrollo de la misma, en concreto, la dictada al amparo de su artículo 29, permanezca transitoriamente en vigor hasta que se aprueben las normas de desarrollo de la Ley. Por eso, son la Ley General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 1787/1996, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la Ley, los fundamentos en virtud de los cuales se adopta esta Resolución.

El artículo 8 del citado Reglamento establece que las reglamentaciones técnicas comunes de los equipos terminales de telecomunicación adoptadas por la Comisión Europea aplicables a los equipos a los que se refiere el Reglamento, tendrán la misma consideración que las especificaciones técnicas aprobadas por el Gobierno, de acuerdo con la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, o las que se aprueben por el Ministerio de Fomento, en virtud de la nueva Ley, una vez que hayan sido referenciadas en el «Boletín Oficial del Estado».

La presente Resolución tiene por objeto publicar la referencia y poner en vigor la reglamentación técnica común CTR 8 adoptadas por la Comisión Europea en su Decisión 99/304/CE, de 12 de abril de 1999, relativa a una reglamentación técnica común para la red digital de servicios integrados (RDSI) y que prestan el teleservicio de telefonía a 3,1 kHz, requisitos para la conexión de terminales con microteléfono (segunda edición), que deroga la Decisión 95/526/CE.

En su virtud, resuelvo:

Primero.—Publicar la referencia a la norma armonizada correspondiente a la reglamentación técnica común europea, la cual deberá cumplirse por todos los equipos destinados a conectarse a la red digital de servicios integrados (RDSI) que prestan el teleservicio de telefonía a 3,1 kHz, para que puedan obtener el certificado de aceptación a que se refiere el artículo 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, para estos equipos.

En el anexo se cita la referencia a la norma armonizada mencionada.

Segundo.—Queda sin efecto la Resolución de 25 de junio de 1998, por la que se hace pública la referencia a la Norma UNE-TBR 8 (junio de 1998).

Los equipos certificados con arreglo a la Resolución indicada en el párrafo anterior podrán seguir siendo comercializados y puestos en servicio hasta la fecha de caducidad de su certificado de aceptación.

Tercero.—La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Secretario general, José Manuel Villar Uribarri.

ANEXO

Referencia a la norma aplicable

La norma armonizada a que se refiere el apartado primero de esta Resolución es:

Base Técnica de Reglamentación 8.

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).

Teleservicio telefonía 3,1 kHz.

Requisitos de conexión para terminales con microteléfono.

UNE-TBR 8 (segunda edición) equivalente a la norma TBR 8 de octubre de 1998 (excluidos los antecedentes).

El texto completo de la mencionada norma UNE-TBR 8 puede solicitarse a:

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación, calle Génova, número 6, 28004 Madrid.